



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 52/2016

AUTOS: "COOP. DE TRABAJO LA PERMANENTE LTDA. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 236/268 contra la Resolución nro. 47569 del 1/9/2015 que desestimó el recurso de impugnación administrativa que impuso una multa al quejoso, por la infracción cometida al artículo agregado a continuación del art. 40 de la ley 11683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la actora que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 278, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes sin informar si se efectuó el depósito de la deuda reclamada.

Que surge de fs. 232/233 que el apelante dió cumplimiento con el requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820, por lo que corresponde la apertura de esta instancia.

Que la sanción cuestionada tiene origen en acta de inspección obrante a fs.1/2 en la que se hace constar que el Sr. Luciano Humberto Ramirez se desempeñaría como empleado de la Cooperativa. Notificada de ello, la contribuyente formula su impugnación en la que, esencialmente, funda su defensa en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 20.337 y de la resolución INAES 4664/13.

Que en el recurso de apelación en tratamiento la actora sostiene que el presunto trabajador a su cargo en realidad tiene vinculación con la cooperativa en calidad de asociado y se encuentra registrado en AFIP como monotributista en tal carácter. Acompaña diversa documental de la que se verifica la conformación legal de la Cooperativa y el cumplimiento de diversos recaudos establecidos por la normativa citada.

Que surge de las actuaciones, de la propia resolución cuestionada obrante a fs. 204/207 y también de la prueba aportada en autos una cuestión que tiene una singular relevancia, esto es el testimonio del trabajador Sr. Ramirez, que se identificó como empleado.

Que en este punto es importante destacar que si bien se aportaron constancias de inscripción del Sr. Ramirez en la AFIP como monotributista, se acompañaron diversos documentos como la solicitud de ingreso como socio a la cooperativa, la aprobación de su condición de socio por las autoridades pertinentes y demás recibos en concepto de anticipos a cuenta de retorno, no surge de las constancias aportadas a la causa documental alguna que refleje la facturación anual de la Cooperativa en cuestión y que permita así corroborar la debida distribución de ingresos entre los socios.

Que tanto el recurso administrativo como la apelación en tratamiento no resultan suficientes a nuestro entender, para desvirtuar los fundamentos vertidos en la resolución atacada. En ella el organismo sostiene acertadamente que el inspector encontró al trabajador prestando servicios que son propios del giro comercial de la accionante, también declaró su fecha de ingreso, remuneración, días y horas de trabajo, por lo que el Ministerio actuante presume la existencia del vínculo laboral (Conf. Art. 23 de la ley 20744).

Que por otra parte centra sus agravios en la invalidez y consecuente nulidad de la resolución en crisis basada en la inobservancia de los antecedentes de hecho y las normas, fundamentación insuficiente y violación del debido proceso.

Que cabe señalar en este punto que la dependencia ministerial, se encuentra facultada para determinar las sanciones controvertidas al constatare hechos y circunstancias ciertas establecidas en la normativa aplicable, que indiquen la presencia de situaciones de evasión previsional, siendo posible ello mediante los controles y verificaciones para la comprobación de tales indicios primarios que indican la existencia de trabajo encubierto o "en negro". En este contexto, es dable recordar que las nulidades sólo resultan oponibles en la medida que coloquen al administrado o responsable en una situación de



indefensión o que obstruyan la normal tramitación del procedimiento administrativo, y no resulta razonable la nulidad peticionada si el apelante pudo ejercer su derecho de defensa, ya que tuvo pleno conocimiento de las actuaciones administrativas, así como la posibilidad de fundar los argumentos que justificarían su posición tanto en sede administrativa como judicial.

Que, por otra parte, ha de destacarse que el simple cumplimiento de los recaudos formales tales como la debida inscripción de la cooperativa ante los órganos correspondientes, registros conforme a derecho, percepción de los ingresos en concepto de “anticipo de retorno”, o realización periódica de asambleas; no resulta suficiente para descartar la posibilidad de que la verdadera naturaleza del vínculo con el trabajador haya sido en calidad de dependiente, en aquellos casos en los que el trabajador no ha tenido efectiva injerencia en la formación de la voluntad social mediante su participación en las asambleas convocadas a tal fin, característica esencial del vínculo cooperativo, pues la mera notificación de su realización no da cuenta de ello.

Que es importante destacar que –como lo afirmara la Sala V de la C.N.A.T. En autos “Moscarelli Luis Alberto c/Pretor Cooperativa de Trabajo Ltda. s/despido”, sentencia del 28/06/18-, las cooperativas de trabajo tienen el objeto de hacer que el beneficio redunde en el productor directo mediante la utilización de capital propio en común. Aspiran a la eliminación de la ganancia ya que el trabajador se apropia, mediante este tipo de relación, del producto íntegro de su trabajo. La cooperativa debe ser genuina, lo que implica la democratización de la estructura empresarial cuya organización y jerarquía es el resultado de la voluntad colectiva de los asociados. En tal sentido es indispensable el cumplimiento del art. 2 inc. 6 de la ley 20.337 en cuanto a la distribución de excedentes. Este criterio es fundamental sobretodo en el marco de una cooperativa de trabajo. Si no hay excedentes repartidos igualitariamente en relación al esfuerzo, y existen quienes se queden con un porcentaje superior, no se puede hablar de una relación cooperativa, sino de uno de los modos de apropiación de la fuerza de trabajo con su correlativo desequilibrio trabajo producto. Así, si en una cooperativa de trabajo los excedentes son apropiados por quienes la dirigen o administran, estaremos ante un contrato de trabajo típico en el que la estructura cooperativa actuaría como norma de cobertura para la elusión del orden jurídico imperativo.

Que es importante destacar que el esfuerzo dialéctico de la recurrente no ha de prosperar, toda vez que no logra conmover ni controvertir los fundamentos –vertidos en la resolución atacada y en base a los cuales se le impuso la multa cuestionada, por lo que se comparten por ser ajustados a derecho a la luz de las pruebas obrante en autos, debidamente ponderadas con arreglo al principio de la sana crítica (art. 386 CPCCN.).

Que, en consecuencia y no habiendose probado en autos la calidad de socio de la Cooperativa del Sr. Luciano Humberto Ramirez, corresponde confirmar la resolución administrativa impugnada.

Que por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente admisible el recurso deducido y disponer su rechazo; 2) Sin costas en la alzada. (Art. 68 del CPCCN).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)

